



Asamblea General

Distr. general
10 de septiembre de 2004
Español
Original: inglés

Quincuagésimo noveno período de sesiones

Quinta Comisión

Tema 108 del programa

**Proyecto de presupuesto por programas
para el bienio 2004-2005**

**Condiciones de servicio y remuneración de los funcionarios
que no forman parte del personal de la Secretaría**

Miembros de la Corte Internacional de Justicia

**Magistrados del Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia**

Magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda

**Magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para
la ex Yugoslavia**

Informe del Secretario General

I. Introducción

1. La Asamblea General, en el párrafo 2 de su resolución 56/285, de 27 de junio de 2002, decidió que se examinaran en su quincuagésimo noveno período de sesiones la remuneración, las pensiones y otras condiciones de servicio de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, los magistrados del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991 (Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia) y los magistrados del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esta naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1994 (Tribunal Penal Internacional para Rwanda).



2. La Asamblea General, en su resolución 57/289, de 20 de diciembre de 2002, examinó las estimaciones revisadas conforme a la resolución 1431 (2002) del Consejo de Seguridad, de 14 de agosto de 2002, relativa al establecimiento de un cuerpo de magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, e hizo suyas las conclusiones y recomendaciones formuladas por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en su informe (A/57/593). En el párrafo 23 de su informe, la Comisión Consultiva recomendó que se aprobase la propuesta contenida en el párrafo 28 del informe del Secretario General (A/57/587), según la cual las condiciones de servicio que la Asamblea había aprobado para los magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia se aplicarían también a los magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. En consecuencia, la Comisión Consultiva recomendó, y la Asamblea General aprobó, las condiciones de servicio propuestas en los párrafos 29 a 34 del informe del Secretario General. Al propio tiempo la Asamblea General acordó que las condiciones de servicio de los magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para Rwanda se examinarían en su quincuagésimo noveno periodo de sesiones.

3. A fin de facilitar el examen de las diversas cuestiones relativas a la remuneración y las condiciones de servicio de los miembros de la Corte, los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, los magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, los magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y los magistrados ad litem del Tribunal Penal internacional de Rwanda el presente informe se ha dividido del modo siguiente: la sección II se dedica a los miembros de la Corte Internacional de Justicia; la sección III se centra en los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, los magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, los magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y los magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para Rwanda; y en la sección IV se hace un análisis y se formulan recomendaciones sobre las remuneraciones, incluidos los ajustes para tener en cuenta las fluctuaciones monetarias y el costo de la vida, otras condiciones de servicio, incluidas las pensiones, las consecuencias financieras y el próximo examen amplio.

II. Miembros de la Corte Internacional de Justicia

A. Remuneración

Antecedentes

4. El Artículo 32 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dispone, en su párrafo 1, que cada miembro de la Corte percibirá un sueldo anual y, en su párrafo 5, que los sueldos y estipendios “serán fijados por la Asamblea General” y que “no podrán ser disminuidos durante el período del cargo”.

5. Desde 1976, la Asamblea viene haciendo exámenes periódicos de los emolumentos de los miembros de la Corte, y el último examen amplio tuvo lugar en su quincuagésimo sexto período de sesiones. En esta ocasión, el Secretario General, en el párrafo 89 de su informe (A/C.5/56/14), observó que, según las estadísticas oficiales neerlandesas proporcionadas por la Corte Internacional de Justicia, el índice de precios al consumo en los Países Bajos durante el período comprendido entre el 1° de enero de 1999 y el 31 de marzo de 2001 aumentó el 8,15%. Durante el período de tres años comprendido entre 1999 y 2001, el dólar de los Estados Unidos se

revaluó un promedio del 19% frente al florín. Por consiguiente, en valores reales los emolumentos de los miembros de la Corte Internacional de Justicia habían mantenido de modo general un ritmo más que acorde con el aumento del costo de la vida en los Países Bajos. En consecuencia, el Secretario General opinaba que los emolumentos anuales de los miembros de la Corte, los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, los magistrados de los Tribunales y los magistrados ad litem debían mantenerse en su nivel actual de 160.000 dólares.

6. El Secretario General también observó que el mecanismo empleado para compensar los emolumentos en relación con el fortalecimiento o el debilitamiento del dólar de los Estados Unidos frente al florín había seguido proporcionando una protección adecuada del valor de los sueldos de los magistrados a lo largo del trienio último y propuso que ese mismo mecanismo de límites mínimos y máximos siguiera aplicándose a los emolumentos pagados en euros de los magistrados.

7. En el párrafo 1 de su resolución 56/285, la Asamblea General hizo suya la recomendación de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de que el sueldo de los miembros de la Corte Internacional de Justicia siguiera siendo de 160.000 dólares al año y que se mantuviera el mecanismo de un límite mínimo y máximo aplicado a los emolumentos de los magistrados después de la implantación oficial del euro, el 1º de enero de 2002.

8. Los emolumentos de los miembros de la Corte son sui generis. No obstante, en los exámenes periódicos amplios de los emolumentos y las condiciones de servicio de esos miembros, los puntos de referencia utilizados a efectos de evaluación comparativa han sido la remuneración neta de los funcionarios superiores de la Secretaría, del Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, del Presidente y el Vicepresidente de la Comisión de Administración Pública Internacional y de los miembros de la Dependencia Común de Inspección, así como los emolumentos brutos del Presidente y los miembros de los más altos tribunales de justicia de los Estados, y de los tribunales internacionales.

9. Los anexos del presente informe contienen información actualizada sobre la evolución de los emolumentos desde enero de 2000 hasta enero de 2004. El anexo I presenta una comparación de las variaciones de los emolumentos totales de los magistrados con los cambios en la remuneración de los funcionarios superiores de la Secretaría y de los miembros de dedicación exclusiva de otros órganos subsidiarios de las Naciones Unidas. El anexo II suministra información, obtenida con asistencia de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas, sobre las variaciones de los emolumentos brutos del presidente y los miembros de los más altos tribunales de justicia de distintos países. Presenta también información sobre la variación de los emolumentos del Presidente y los miembros del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo y del Tribunal encargado de las reclamaciones entre el Irán y los Estados Unidos de La Haya, así como de los emolumentos del Presidente y los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Mecanismo de límite mínimo y máximo de la moneda

10. Se recordará que, en abril de 1987, la Comisión de Administración Pública Internacional introdujo el concepto de un límite mínimo y máximo en moneda local en varios lugares de destino, incluida La Haya, para proteger a los funcionarios contra el debilitamiento del dólar. Los párrafos 11 a 15 del informe del Secretario General a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo período de sesiones

(A/C.5/48/66) contienen los antecedentes y un examen del funcionamiento del sistema de límite mínimo y máximo, según se aplican a los emolumentos de los miembros de la Corte.

11. Con arreglo a la metodología propuesta por el Secretario General y, según la recomendación de la Comisión Consultiva, aprobada por la Asamblea General, los tipos de cambio mínimo y máximo se fijaron en un 4% por encima y por debajo del tipo de cambio medio del florín con respecto al dólar de los Estados Unidos del año anterior. Ese mecanismo ha seguido aplicándose desde el último examen amplio de los emolumentos y las condiciones de servicio de los miembros de la Corte. El tipo de cambio medio para el año 2001 fue de 1,11656 euros por dólar. Sobre esa base, los tipos de cambio mínimo y máximo para 2002 se fijaron en 1,0719 y 1,16122 euros, respectivamente. El tipo de cambio mínimo de 1,0719 euros por dólar dio lugar a un pago mínimo en moneda local de 14.292 euros al mes, y el tipo de cambio máximo de 1,16122 euros, a un pago máximo en moneda local de 15.483 euros al mes.

12. En el año 2002 el dólar de los Estados Unidos se debilitó frente al euro y el tipo de cambio medio fue de 1,07 euros por dólar. Sobre esta base, para el año 2003 los tipos de cambio mínimo y máximo se fijaron en 1,0272 y 1,1128 euros, respectivamente. El tipo de cambio mínimo de 1,0272 euros por dólar dio lugar a un pago mínimo de 13.696 euros al mes, y el tipo de cambio máximo de 1.1128 euros por dólar a un pago máximo de 14.837 euros al mes.

13. En el año 2003 el dólar siguió debilitándose frente al euro y se preveía que, a finales del año, las cantidades mínima y máxima correspondientes a 2004 habían disminuido un 18% aproximadamente. El tipo medio de cambio en 2003 fue de 0,8958 euros por dólar, lo que representó un descenso del 16,3% con respecto a la media de 2002. Sobre esta base, los tipos de cambio mínimo y máximo para el año 2004 se han fijado en 0,86 y 0,93163 euros, respectivamente. En consecuencia, la cifra de 12.421 euros que correspondería a la cuantía máxima para 2004 sería muy inferior al nivel mínimo de 13.696 euros correspondiente a los emolumentos mensuales percibidos por los miembros de la Corte Internacional de Justicia y los magistrados de los Tribunales durante los doce meses de 2003.

14. Esta situación no carece de precedentes. En 1996 y 1997, cuando el valor del dólar cayó en picado en el intervalo entre los exámenes periódicos de las condiciones de servicio de los miembros de la Corte, el Subsecretario General para la Gestión de los Recursos Humanos escribió a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto recordando las disposiciones del artículo 32 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, según el cual los sueldos y estipendios de los miembros de la Corte “serán fijados por la Asamblea General” y “no podrán ser disminuidos durante el periodo del cargo”. Por consiguiente, el Subsecretario General comunicó a la Comisión Consultiva que, en espera del próximo examen amplio de las condiciones de servicio de los miembros de la Corte, se había considerado razonable seguir aplicando en 1996 el mínimo y el máximo de 1995. En 1997 se siguieron aplicando esos niveles, por las mismas razones. Sobre la base de este precedente, y teniendo presente la continua tendencia al debilitamiento del dólar frente al euro, el Subsecretario General para la Gestión de los Recursos Humanos comunicó a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que, en espera del examen amplio de las condiciones de servicio de los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales en 2004, se había propuesto aplicar el mismo método y utilizar en 2004 los mínimos y máximos utilizados en 2003.

15. En consecuencia, los tipos de cambio mínimo (1,0272 euros) y máximo (1,1128 euros) aplicados en 2003 para los pagos mensuales en euros a los miembros de la Corte Internacional de Justicia y a los magistrados del Tribunal para la ex Yugoslavia, así como a los magistrados del Tribunal para Rwanda que ejercen sus funciones en La Haya, se han aplicado de nuevo en 2004. El tipo de cambio mínimo de 1,0272 euros por dólar da lugar a un pago mínimo de 13.696 euros al mes, y el tipo de cambio máximo de 1,1128 euros por dólar a un pago máximo de 14.837 dólares al mes.

16. El cuadro 1 presenta el tipo de cambio oficial del euro en relación con el dólar durante el período comprendido entre enero de 2002 y agosto de 2004.

Cuadro 1

Tipo de cambio del euro en relación con el dólar de los Estados Unidos, de enero de 2002 a agosto de 2004

<i>Mes</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>
Enero	1,136	0,958	0,801
Febrero	1,136	0,931	0,804
Marzo	1,158	0,929	0,804
Abril	1,143	0,929	0,820
Mayo	1,108	0,911	0,844
Junio	1,065	0,849	0,816
Julio	1,019	0,875	0,821
Agosto	1,016	0,877	0,831
Septiembre	1,015	0,922	
Octubre	1,022	0,875	
Noviembre	1,017	0,852	
Diciembre	1,009	0,842	

17. Durante el período de 32 meses comprendido entre enero de 2002 y agosto de 2004 se han hecho pagos mínimos durante 27 meses. Sobre esta base, puede verse que el mecanismo de mínimos y máximos utilizado para regular los emolumentos frente a un debilitamiento/fortalecimiento del dólar ha servido para limitar la disminución de los emolumentos de los miembros de la Corte expresados en euros cuando el dólar se debilitó frente al euro, especialmente en 2003 y en los ocho primeros meses de 2004.

18. Según la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos, el índice de precios al consumo en los Países Bajos durante el período comprendido entre enero de 1999 y el mes de mayo de 2004 aumentó un 17,4%. En el período de enero de 2002 a enero de 2004 el índice de precios al consumo de los Países Bajos aumentó un 3,68%. Desde enero de 2002 el dólar ha perdido un 26,8% frente al euro, por término medio.

B. Otras condiciones de servicio

19. Los antecedentes sobre las otras condiciones de servicio de los miembros de la Corte figuran en el informe presentado por el Secretario General a la Asamblea

en su cuadragésimo octavo período de sesiones (A/C.5/48/66): en la sección IV (párrs. 16 a 21), en lo relativo a los estipendios especiales del Presidente y del Vicepresidente cuando desempeña las funciones de Presidente; en la sección V (párrs. 22 y 23), respecto de la remuneración de los magistrados ad hoc, y en la sección VI (párrs. 24 a 31), en lo referente a los gastos de educación de los hijos.

Estipendio especial del Presidente y del Vicepresidente cuando desempeña las funciones de Presidente

20. Según el Artículo 32 del Estatuto de la Corte, el Presidente percibirá un estipendio anual especial (párr. 2) y el Vicepresidente un estipendio especial por cada día que desempeñe las funciones de Presidente (párr. 3). Al igual que en el caso de la remuneración, esos estipendios “serán fijados por la Asamblea General” y “no podrán ser disminuidos durante el período del cargo” (párr. 5). La Asamblea General, en su resolución 31/204, de 22 de diciembre de 1976, dispuso que “el examen de los estipendios pagaderos a los miembros de la Corte se realice simultáneamente con el examen periódico de su sueldo anual” (párr. 3).

21. En el párrafo 2 de la sección IV de su resolución 50/216, de 23 de diciembre de 1995, la Asamblea General aprobó la recomendación de la Comisión Consultiva de que el estipendio especial del Presidente se mantuviera en 15.000 dólares por año, y que el estipendio especial del Vicepresidente cuando desempeñara las funciones de Presidente siguiera siendo de 94 dólares al día, hasta un máximo de 9.400 dólares por año.

22. Con respecto al estipendio anual especial del Presidente y al estipendio diario especial del Vicepresidente cuando ejerza las funciones del Presidente, en ocasión de su examen más reciente, en 2001, la Corte advirtió que, aunque su carga de trabajo había aumentado extraordinariamente, los dos estipendios mencionados eran los mismos desde 1985.

23. En su informe de 12 de noviembre de 2001 (A/C.5/56/14), el Secretario General tomó nota de los argumentos expuestos por la Corte y del aumento indicado de la carga de trabajo de ésta desde 1985, así como de la intensa actividad de los dos Tribunales, y observó que había pasado mucho tiempo (más de 15 años) desde la última revisión del estipendio especial del Presidente de la Corte. El Secretario General consideró razonable la recomendación de que se aumentase el estipendio especial del Presidente y propuso que se estudiase la posibilidad de aumentar dicho estipendio de 15.000 a 20.000 dólares de los Estados Unidos, lo que representaría un incremento aproximado del 30% de la cuantía actual del estipendio especial del Presidente de la Corte y de los Presidentes de los Tribunales. Un aumento proporcional del estipendio del Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia y de los Vicepresidentes de los Tribunales cuando ejercieran las funciones de Presidente daría lugar a que el estipendio especial del Vicepresidente pasase de 94 a 125 dólares al día, con sujeción a un máximo de 12.500 dólares al año.

24. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, en el párrafo 5 de su informe de 16 de diciembre de 2001 (A/56/7/Add.2), dijo no estar convencida, en el momento presente, de la necesidad de aumentar el monto del estipendio especial del Presidente y del Vicepresidente cuando desempeñe la función del Presidente, por lo que recomendó que no se aprobara esta propuesta.

Magistrados ad hoc

25. Según el Artículo 31 del Estatuto de la Corte, los magistrados ad hoc son personas a las que las partes en los asuntos de que la Corte conoce designan para que participen “en las decisiones de la Corte en términos de absoluta igualdad con sus colegas” (párr. 6). Con arreglo al párrafo 4 del Artículo 32 del Estatuto, esos magistrados “recibirán remuneración por cada día que desempeñen las funciones del cargo”. Los antecedentes históricos de la determinación de la cuantía de esa remuneración figuran en el informe que el Secretario General presentó a la Asamblea General en el cuadragésimo período de sesiones de ésta (A/C.5/40/32, párrs. 35 a 41).

26. En el párrafo 3 de su resolución 48/252 A, de 26 de mayo de 1994, la Asamblea General decidió que, a partir del 1° de enero de 1994, los magistrados ad hoc a que se refería el Artículo 31 del Estatuto de la Corte recibieran, por cada día que desempeñaran sus funciones, un trescientos sesenta y cincoavo del sueldo anual pagadero en ese momento a un miembro de la Corte. Con motivo del examen de 1995, el Secretario General propuso que no se modificaran estas disposiciones. En el párrafo 2 de la sección IV de su resolución 50/216, la Asamblea General se declaró de acuerdo con la propuesta. Con motivo del examen de 1998, el Secretario General propuso una vez más que no se introdujera ningún cambio en esas disposiciones. La Asamblea, en el párrafo 1 de la sección VIII de su resolución 53/214, de 18 de diciembre de 1998, se declaró de acuerdo con la propuesta.

Subsidio de educación

27. Los antecedentes relativos a los gastos de educación, según se aplican a los miembros de la Corte, figuran en los párrafos 24 a 29 del documento A/C.5/48/66. En su informe a la Asamblea General en su quincuagésimo tercer período de sesiones (A/C.5/53/11), el Secretario General propuso que, de conformidad con lo previsto en la resolución 42/250 C de la Asamblea, de 21 de diciembre de 1990, se hiciera extensivo a los miembros de la Corte, en las mismas condiciones y a partir del año escolar en curso, el 1° de enero de 1998, el aumento del subsidio de educación (incluido el correspondiente a los hijos discapacitados) aplicable a partir del 1° de enero de 1997 a los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores, aprobado por la Asamblea en su resolución 51/216, de 18 de diciembre de 1996. Recomendó también que toda decisión tomada por la Asamblea en su quincuagésimo tercer período de sesiones de actualizar el subsidio de educación o los cambios en las disposiciones relativas a los hijos discapacitados se hicieran extensivos a los miembros de la Corte. En el párrafo 11 de su informe (A/C.5/53/11), la Comisión Consultiva recomendó que se aprobaran las propuestas del Secretario General. La Asamblea General, en su resolución 53/214, aprobó las recomendaciones de la Comisión Consultiva y, sobre esa base, el aumento del subsidio de educación (incluido el correspondiente a los hijos discapacitados), con efecto al 1° de enero de 1999, aplicable a funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores, aprobado por la Asamblea General en la sección II de su resolución 53/209, de 18 de diciembre de 1998, se hizo extensivo también, en las mismas condiciones, a los miembros de la Corte, a partir del año escolar en curso, el 1° de enero de 1999. El Secretario General propuso que, de conformidad con lo previsto en la resolución 45/250 C, se hiciera extensivo a los miembros de la Corte y a los magistrados de los Tribunales, en las mismas condiciones y a partir del año escolar en curso, el 1° de enero de 2001, el aumento del subsidio de educación (incluido el correspondiente a los hijos discapacitados) aplicable a partir del 1° de enero de 2001 a los funcionarios del cuadro

orgánico y categorías superiores, aprobado por la Asamblea General en la sección I.E de su resolución 55/223, de 23 de diciembre de 2000. En el párrafo 6 de su informe (A/56/Add.2), la Comisión Consultiva recomendó que se aprobaran las propuestas del Secretario General. La Asamblea, en su resolución 56/285, hizo suyas las recomendaciones de la Comisión Consultiva y, sobre esa base, el aumento del subsidio de educación (incluido el correspondiente a los hijos discapacitados), con efecto al 1° de enero de 2001, aplicable a funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores, aprobado por la Asamblea General en la sección I.E de su resolución 55/223, se hizo extensivo también, en las mismas condiciones, a los miembros de la Corte, a partir del año escolar en curso, el 1° de enero de 2001.

Reglamento de gastos de viaje y dietas

28. La Asamblea General, en su resolución 37/240, de 21 de diciembre de 1982, aprobó el Reglamento de gastos de viaje y dietas de la Corte Internacional de Justicia. En el párrafo 5 de la sección VIII de su resolución 53/214, la Asamblea aprobó también el Reglamento de gastos de viaje y dietas de los magistrados de los Tribunales, que figura en el anexo III del informe del Secretario General (A/52/520).

29. En 2001, el Secretario General señaló que, como resultado de las medidas adoptadas por la Asamblea General en la sección I.E de su resolución 44/198, de 21 de diciembre de 1989, se suprimió el derecho al subsidio de instalación y se sustituyó por un subsidio por asignación con efecto a partir del 1° de julio de 1990. Teniendo presentes varias cuestiones de interpretación relativas al derecho al subsidio de instalación, especialmente en lo que concierne a su aplicación a los magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, el Secretario General propuso, y la Comisión Consultiva recomendó, que se actualizase el texto de los reglamentos de gastos de viaje y dietas aplicables, respectivamente, a los miembros de la Corte y de los Tribunales y que se revisara la referencia al “subsidio de instalación” a fin de que se haga referencia al “subsidio por asignación” previsto para los funcionarios de categoría superior de la Secretaría de las Naciones Unidas. La Asamblea General aceptó esta recomendación en su resolución 56/285.

Seguro médico

30. Con respecto a la participación de los miembros de la Corte Internacional en el plan de seguro médico de la Organización y a las contribuciones de ésta al pago de las primas correspondientes de manera similar a las aportaciones por concepto de seguro médico que efectúan las Naciones Unidas en beneficio de otros altos funcionarios, el Secretario General, en el párrafo 27 de su informe a la Asamblea General en su quincuagésimo sexto período de sesiones (A/C.5/56/14), reiteró la opinión de que, si bien el Secretario General y los dos miembros a jornada completa de la Comisión de Administración Pública Internacional y el Presidente de la Comisión Consultiva participaban en el plan de seguro médico de la Sede, la Organización no hacía contribuciones al pago de las primas respectivas. Los miembros de la Corte tenían también la posibilidad de afiliarse al plan de seguro médico Delta Lloyd, previo pago de la prima íntegra.

31. Con respecto a la participación de los miembros de la Corte en los planes de seguro médico del sistema de las Naciones Unidas, la Comisión Consultiva, en el párrafo 8 de su informe (A/56/7/Add.2), señaló que entendía que los miembros de la

Corte sufragarían el costo total de su participación en esos planes y que la Organización no tendría que contribuir a dicho costo.

Pensiones

32. De conformidad con el párrafo 7 del Artículo 32 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sus miembros tienen derecho a pensiones de jubilación cuyas condiciones fija por reglamento la Asamblea General.

33. El Secretario General presentó en sus informes a la Asamblea General en sus períodos de sesiones cuadragésimo octavo, cuadragésimo noveno, quincuagésimo y quincuagésimo tercero (A/C.5/48/66, párrs. 32 a 41, A/C.5/49/8, párrs. 6 a 16, A/C.5/50/18, párrs. 25 a 28, y A/C.5/53/11, párrs. 33 a 38) una reseña de las prestaciones por concepto de pensiones y las consecuencias del plan de pensiones vigente.

34. En el quincuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, el Secretario General, en respuesta a una petición de la Asamblea, facilitó, en su informe A/C.5/53/11, un análisis actuarial sobre el diseño del plan de pensiones, la metodología empleada para determinar la remuneración pensionable, el período de aportación y las prestaciones de jubilación, incluida la jubilación anticipada y la pensión del cónyuge supérstite.

35. Sobre la base del análisis y las conclusiones del informe de un actuario, el Secretario General señalaba que el plan de pensiones de los miembros de la Corte debía establecer prestaciones adecuadas de jubilación para los magistrados que reunieran los criterios prescritos respecto de la edad de jubilación y el período de servicio, partiendo del principio de que la pensión permitía mantener un determinado nivel de vida como ingreso sustitutivo.

36. Sobre la base de las recomendaciones del actuario respecto del plan de pensiones para los miembros de la Corte, el Secretario General recomendó que (A/C.5/53/11, párr. 40):

- a) La remuneración pensionable de los magistrados sería igual a la mitad del sueldo anual;
- b) La pensión fuese la remuneración pensionable del magistrado que completase un período de nueve años, con una reducción proporcional en el caso de que no hubiese completado el período. Los magistrados que fueran reelegidos deberían percibir un trescientosavo de su remuneración pensionable por cada mes adicional de servicio, hasta una pensión máxima equivalente a dos tercios de su sueldo anual;
- c) El plan de pensiones no dependiese de las aportaciones de los magistrados;
- d) En caso de jubilación anticipada se aplicase un factor de reducción actuarial a razón de la mitad del 1% al mes;
- e) El cónyuge supérstite percibiera una pensión igual al 60% de la pensión del magistrado; como alternativa, los magistrados podrían optar por que se aumentase la pensión del cónyuge hasta un máximo de un 50% adicional mediante una reducción actuarial de su pensión;
- f) En caso de que el cónyuge supérstite contrajera nuevas nupcias, se le otorgase una suma alzada equivalente al doble de la cuantía de la prestación anual actual del cónyuge a título de liquidación final.

37. No obstante, con objeto de evitar un incremento desproporcionado de la pensión, el Secretario General propuso que la recomendación de basar la pensión de jubilación en la mitad del sueldo anual se aplicase en dos etapas: un 50% que entraría en vigor el 1° de enero de 1999 y el resto el 1° de enero de 2000.

38. La Comisión Consultiva, en los párrafos 15 a 17 de su informe (A/53/7/Add.6) expresó su acuerdo con las recomendaciones a), c), d) y f) formuladas por el Secretario General (A/C.5/53/11, párr. 40) acerca de las revisiones al plan de pensiones de los miembros de la Corte. Sin embargo, respecto de la recomendación b), la Comisión Consultiva era partidaria de una reducción proporcional en el caso de los magistrados que no hubiesen prestado servicio el período de nueve años completo, pero no recomendaba aumento alguno si el período de servicio era superior a nueve años. En lo referente a la recomendación e), la Comisión Consultiva era partidaria de que se aplicara también la base del 50% para las pensiones del cónyuge supérstite. En cuanto a la puesta en práctica de la revisión de la pensión de jubilación, la Comisión Consultiva sostenía que sería más conveniente aplicar la recomendación del Secretario General en tres fases en lugar de dos: en la primera, con efecto a partir del 1° de enero de 1999, la pensión aumentaría en un 20% hasta llegar a 60.000 dólares; en la segunda, con efecto a partir del 1° de enero de 2000, aumentaría otro 16,7% hasta llegar a 70.000 dólares y, en la última, con efecto a partir del 1° de enero de 2001, aumentaría otro 14,3% hasta llegar a 80.000 dólares.

39. En los párrafos 18 a 21 de su informe (A/53/7/Add.6), la Comisión Consultiva recomendó que la pensión tuviera como base la mitad del sueldo anual de 160.000 dólares, esto es, 80.000 dólares. En esas circunstancias, la Comisión Consultiva no consideraba necesario mantener las disposiciones vigentes acerca de las pensiones de los magistrados de la Corte que habían prestado servicio durante más de nueve años, en particular si se tenía en cuenta que no contribuían al plan de pensiones y, por lo tanto, recomendó que no se aplicara más el aumento de la pensión de los magistrados que fueran reelegidos. La Comisión Consultiva recomendó asimismo que las pensiones en pago fuesen revisadas automáticamente en los mismos porcentajes y las mismas fechas que los ajustes de sueldo. Si la Asamblea General aceptara esa recomendación, sería necesario revisar el párrafo 2 del artículo 7 del Reglamento del plan de pensiones de los miembros de la Corte Internacional de Justicia.

40. La Asamblea General, en el párrafo 1 de la sección VIII de la resolución 53/214, aprobó las recomendaciones de la Comisión Consultiva sobre la remuneración, las pensiones y otras condiciones de servicio de los miembros de la Corte Internacional de Justicia. En el párrafo 2 de la misma resolución, la Asamblea expresó su acuerdo con la observación formulada por la Comisión Consultiva en el párrafo 21 de su informe (A/53/7/Add.6) respecto a la revisión del párrafo 2 del artículo 7 del Reglamento del plan de pensiones de los miembros de la Corte Internacional de Justicia para que su texto fuera: “Las pensiones que se estén pagando se revisarán automáticamente en el mismo porcentaje y en la misma fecha que los ajustes de los sueldos”.

41. En ocasión del examen más reciente, en 2001, el Secretario de la Corte presentó a la Secretaría un cuadro en que se enumeran las pensiones en pago, señalando que su monto es desproporcionado en el caso de los magistrados retirados o sus cónyuges supérstites. A fin de rectificar esta situación y dar igual tratamiento a todos los ex magistrados de la Corte, ésta consideraba que lo ideal sería que las pensiones que se estuvieran pagando se ajustaran a las pensiones en el régimen vigente.

Sin embargo, en su informe de 1998 (A/53/7/Add.6) la Comisión Consultiva consideró que ello no sería conveniente porque entrañaría un gasto considerable para las Naciones Unidas. En vista de ello, la Corte no pide un ajuste de pensiones *stricto sensu*. Sin embargo, en razón de que le preocupaba la cuantía de los pagos de pensiones a los ex magistrados, la Corte sugirió que se tomaran medidas para corregir esta disparidad aumentando en la medida de lo posible los pagos por concepto de pensiones a sus ex magistrados.

42. A este respecto, el Secretario General opinó que, como la Asamblea General era la única autoridad facultada para determinar las condiciones de servicio y las prestaciones de jubilación de la Corte Internacional de Justicia, la cuestión de los pagos en concepto de pensiones debía someterse a examen en la Asamblea. En el párrafo 10 de su informe (A/56/7/Add.2), la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto señaló que el derecho a la pensión se establecía en el momento de la jubilación y sobre la base de las condiciones de servicio vigentes en ese momento. Además, la Comisión Consultiva recordó que había hecho una recomendación, que la Asamblea General aprobó, para que los pagos en concepto de pensiones se revisaran automáticamente en el mismo porcentaje y en la misma fecha que los ajustes de los sueldos; la Comisión estimaba que esta recomendación seguía asegurando la protección necesaria de las pensiones contra el aumento del costo de la vida.

43. En su informe (A/C.5/57/36) el Secretario General señaló a la atención de la Asamblea General que en el reglamento de los planes de pensiones aplicables a los miembros de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, no había ninguna disposición que impidiera el pago de una pensión de jubilación a los magistrados que anteriormente hubieran prestado servicios en cualquiera de estos órganos, mientras prestaban servicios como magistrados en otro de esos órganos. De conformidad con la recomendación de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la Asamblea General, en su resolución 58/264, de 23 de diciembre de 2003, decidió enmendar el artículo 1 del reglamento del plan de pensiones de los miembros de la Corte Internacional de Justicia. En consecuencia, el párrafo 7 del artículo 1 del mencionado reglamento, establece que no se pagará ninguna pensión de jubilación a un ex miembro que haya sido elegido o nombrado magistrado permanente del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia o del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, o que haya sido nombrado para desempeñar funciones en el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia o en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda como magistrado ad litem hasta que deje de tener ese cargo o nombramiento.

44. En abril de 2004 el Secretario de la Corte escribió a la Secretaría en relación con las pensiones percibidas por los ex magistrados o los cónyuges supervivientes, para expresar su preocupación por el nivel de las pensiones de dichos magistrados y cónyuges supervivientes. La carta decía lo siguiente:

“En relación con las pensiones percibidas por los ex magistrados o los cónyuges supervivientes, deseo referirme a la revisión de las prestaciones de los pensionados después del aumento de los emolumentos de los miembros de la Corte, y también a la cuestión de la protección de las pensiones contra las fluctuaciones monetarias.

En primer lugar, en lo referente al nivel de pensiones deseo señalar a su atención el párrafo 2 del artículo VII del reglamento del plan de pensiones para los miembros de la Corte Internacional de Justicia, según el cual las pensiones en pago deberán revisarse automáticamente con arreglo al mismo porcentaje, y en la misma fecha, que los ajustes de los sueldos. Por consiguiente, todo aumento de los emolumentos de los miembros de la Corte debe reflejarse automáticamente en un aumento de todas las pensiones en el mismo porcentaje.

En segundo lugar, en lo relativo a la cuestión del impacto de las fluctuaciones monetarias, debe observarse que, a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro plan de pensiones, el valor de las pensiones para los magistrados y los cónyuges supervivientes no está protegido. Las pensiones se fijan en dólares de los Estados Unidos y, en caso de una conversión a la moneda del país de pago o de residencia de los magistrados o los cónyuges supervivientes, a menudo se produce un fuerte deterioro del valor en Europa y en otros lugares no pertenecientes a la zona del dólar.

La solución mejor y más fácil del problema de la protección de las pensiones abonadas fuera de la zona del dólar parece ser la aplicación de una metodología adecuada de mínimos y máximos, como la que se aplica actualmente con respecto a los emolumentos. Sin embargo, la aplicación de esta metodología podría redundar en detrimento de los pensionados que han optado por cobrar las pensiones en dólares de los Estados Unidos, porque si se alcanzase el tipo de cambio máximo los pagos en dólares se reducirían. Por consiguiente, para los pensionados residentes en la zona del dólar o con cuenta corriente en los Estados Unidos, la aplicación del límite máximo en el contexto de las pensiones sería inadecuado, y, no se les debe aplicar.

En vista de lo dicho, podrían preverse medios alternativos para proteger el valor de las pensiones, como por ejemplo:

- a) Hacer extensivo un mecanismo adecuado de límites mínimos y máximos a la moneda del país de residencia del pensionado, o del país al que se envíe la pensión;
- b) Hacer que el pensionado pueda optar de modo definitivo, en la fecha de recepción del primer pago de la pensión, por recibir todos los pagos futuros en concepto de la pensión en una moneda local o en dólares de los Estados Unidos (para las pensiones que se paguen ahora o en el futuro en la zona del euro, la tasa fija podría ser el tipo de cambio del euro en la fecha de implantación de esta moneda);
- c) Aplicar el sistema doble de ajuste de las pensiones que se utiliza actualmente para la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas;
- d) En la zona del euro, la opción [...], que se pague la misma suma, en euros o en dólares [...].”

III. Magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y magistrados ad litem

A. Magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda

1. Introducción

Antecedentes

45. En su resolución 827 (1993), de 25 de mayo de 1993, el Consejo de Seguridad decidió establecer el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y aprobó su estatuto. Según el párrafo 4 del artículo 13 del Estatuto de este Tribunal, las condiciones de servicio de sus magistrados serán las de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. En su resolución 995 (1994), de 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad decidió establecer el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y aprobó su estatuto. Según el párrafo 5 del artículo 12 de su Estatuto, las condiciones de servicio de sus magistrados serán las de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

46. El Secretario General, en el informe que presentó a la Asamblea General en su quincuagésimo tercer período de sesiones (A/C.5/53/11), proponía un aumento de los sueldos y pensiones de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia y las correspondientes revisiones de los sueldos y pensiones de los magistrados de los Tribunales, a la luz de lo que determinara la Asamblea en el caso de los miembros de la Corte. La Asamblea tuvo también a la vista el informe del Secretario General sobre las condiciones de servicio de los magistrados de los dos Tribunales, que le había sido presentado en su quincuagésimo segundo período de sesiones (A/52/520).

47. La Asamblea General, en el párrafo 4 de la sección VIII de su resolución 53/214, aprobó las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre la remuneración, las pensiones y otras condiciones de servicio de los magistrados de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Rwanda.

48. La Asamblea General, en el párrafo 1 de su resolución 56/285, hizo suyas las observaciones y recomendaciones hechas por la Comisión Consultiva en su informe (A/56/7/Add.2) con respecto a los emolumentos, el estipendio especial del Presidente y del Vicepresidente cuando desempeña la función de Presidente, el subsidio de educación, las pensiones y otras condiciones de servicio de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, los magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y los magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, sin perjuicio de las reglas que rigen las condiciones de servicio de los magistrados de los Tribunales.

2. Remuneración

49. Como consecuencia de la decisión adoptada por la Asamblea General en el párrafo 1 de su resolución 56/285, el sueldo anual de los magistrados de los dos Tribunales quedó fijado en 160.000 dólares al año.

3. Otras condiciones de servicio

50. Como se ha indicado anteriormente, la Asamblea General, en el párrafo 4 de la sección VIII de su resolución 53/214, aprobó las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto acerca de las demás condiciones del servicio de los magistrados de los dos Tribunales, entre otras cosas. La información básica sobre esas condiciones de servicio se encuentra en el informe del Secretario General a la Asamblea General en su quincuagésimo segundo período de sesiones (A/52/520, párrs. 19 a 21). Esas otras condiciones incluían el estipendio especial para el Presidente y para el Vicepresidente cuando actuara como Presidente, el subsidio de educación, las prestaciones de jubilación y las normas relativas a los gastos de viaje y dietas.

Estipendio especial del Presidente y del Vicepresidente cuando desempeñe las funciones de Presidente

51. El estipendio especial del Presidente de cada uno de los Tribunales se fijó en 15.000 dólares al año. El estipendio especial para el Vicepresidente de cada uno de los Tribunales se fijó en 94 dólares por día hasta un máximo de 9.400 dólares al año.

Subsidio de educación

52. La Asamblea General, en su resolución 56/285, aprobó las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto acerca del aumento del subsidio de educación para los miembros de la Corte Internacional de Justicia e hizo extensivo también en las mismas condiciones a los miembros de la Corte y a los magistrados de los dos Tribunales, a partir del año lectivo que había empezado el 1° de enero de 2001, el aumento del subsidio de educación (incluso para los hijos discapacitados) que había entrado en vigor el 1° de enero de 2001 y había aprobado la Asamblea General para los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores en la sección I.E de su resolución 55/223.

Reglamento de gastos de viaje y dietas

53. En su resolución 53/214, la Asamblea General aprobó las disposiciones relativas a los gastos de viajes y dietas de los magistrados de los Tribunales, que figuraban en el anexo III del informe del Secretario General (A/52/520). Como se ha señalado anteriormente, teniendo en cuenta la recomendación de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la Asamblea General, en su resolución 56/285, decidió que se actualizara el texto de los reglamentos de gastos de viaje y dietas aplicables a los magistrados de los Tribunales y que se revisara la referencia que se hacía al “subsidio de instalación” a fin de que se hiciera referencia al “subsidio por asignación” previsto para los funcionarios de categoría superior de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Prestación para familiares supérstites

54. En lo relativo al establecimiento de una prestación para familiares supérstites consistente en una suma alzada para el caso de fallecimiento de un magistrado de cualquiera de los dos Tribunales, la Asamblea General, sobre la base de su examen de la nota del Secretario General de 8 de noviembre de 1999 (A/C.5/54/30), aprobó las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en el párrafo 7 de su resolución 54/240 A, de 23 de diciembre de 1999, y estableció una prestación en virtud de la cual los familiares supérstites recibirían un pago global equivalente a un mes de sueldo básico por cada año de servicio, con un mínimo de un mes y un máximo de cuatro meses.

Seguro médico

55. El Secretario General observa que la Organización ha adoptado disposiciones para que los magistrados de los Tribunales puedan afiliarse, en el momento de su nombramiento, a un plan de seguro médico adecuado de las Naciones Unidas de conformidad con las normas y procedimientos administrativos pertinentes, previo pago de la prima íntegra.

Cuestiones relacionadas con la clasificación como lugar de destino en condiciones difíciles

56. Con motivo del examen amplio más reciente, que tuvo lugar en 2001, la Presidenta del Tribunal Penal Internacional para Rwanda recordó que el párrafo 5 del artículo 12 del Estatuto de ese Tribunal establece que las condiciones de servicio de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda serán las de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Éste es un principio general que no excluye que haya una diferencia entre los lugares de destino en que trabajan los magistrados de los dos Tribunales.

57. Asimismo, la Presidenta señaló que, a diferencia de sus homólogos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, los magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda trabajaban en Arusha, lugar de destino oficialmente reconocido “en la categoría C”, y en el cual el personal del Tribunal tenía derecho a vacaciones para visitar el país de origen una vez cada 12 meses. En consecuencia, si el ciclo de las vacaciones para visitar el país de origen normalmente tiene en cuenta las condiciones difíciles en que se trabaja en el lugar de destino, parecería lógico que lo mismo fuera aplicable a los viajes de los magistrados para visitar el país de origen.

58. En el párrafo 9 de su informe (A/56/7/Add.2), la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto indicó que no tenía objeción al cambio que se proponía con respecto al viaje al país de origen de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, a fin de tener en cuenta la clasificación del lugar de destino como lugar difícil. La Asamblea General, en su resolución 56/285, aceptó la recomendación de la Comisión Consultiva.

Pensiones

59. En los párrafos 63 y 64 de su informe (A/C.5/53/11), el Secretario General se refirió a las condiciones de servicio de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia que, según el párrafo 4 del artículo 13 del Estatuto de

ese Tribunal, eran las mismas que los de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, y a las de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda que, según el párrafo 5 del artículo 12 de su Estatuto, eran las mismas que las de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

60. En el párrafo 29 de su informe (A/53/7/Add.6), la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto recomendó que las pensiones de los magistrados de los dos Tribunales se basaran en las correspondientes a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, prorrateadas para tener en cuenta la diferencia en la duración de sus mandatos, es decir, nueve años en el caso de los miembros de la Corte Internacional y cuatro en el de los magistrados de ambos Tribunales. Sobre esa base, y utilizando la fórmula por etapas recomendada por la Comisión Consultiva para los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, las pensiones de los magistrados de los dos Tribunales que hubiesen prestado servicios durante un período completo de cuatro años subirían a 35.500 dólares para el 1° de enero de 2001.

61. La Asamblea General, en el párrafo 4 de la sección VIII de su resolución 53/214, aprobó las recomendaciones de la Comisión Consultiva sobre los emolumentos, las pensiones y otras condiciones de servicio de los magistrados de los dos Tribunales y, en el párrafo 6 de la misma resolución, aprobó el Reglamento del plan de pensiones de los magistrados de los dos Tribunales que figuraban en los anexos IV y V, respectivamente, del informe del Secretario General (A/52/520) con las consiguientes modificaciones derivadas de las decisiones que la Asamblea adoptase en esa resolución.

62. Con motivo del examen amplio más reciente, realizado en 2001, el Secretario General, en los párrafos 60 a 67 de su informe (A/C.5/56/14), compartió las preocupaciones expresadas por los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en cuanto al reglamento del plan de pensiones que había aprobado la Asamblea General en su quincuagésimo tercer período de sesiones. La Comisión Consultiva tomó nota de la opinión del Secretario General de que la diferencia entre las prestaciones de jubilación de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y las de los miembros de la Corte Internacional de Justicia debía señalarse a la atención de la Asamblea. La Comisión Consultiva observó que la Asamblea había aprobado un plan de pensiones para los magistrados de los Tribunales sobre la base de sus recomendaciones anteriores, en las cuales la Comisión había recomendado que las prestaciones de jubilación de los magistrados de los Tribunales se basaran en las aplicables a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, prorrateadas para tener en cuenta la diferencia del período en el cargo, a saber, nueve años para los miembros de la Corte y cuatro años para los magistrados de los Tribunales. La Comisión Consultiva reiteró su opinión sobre esta materia y por tanto no recomendó ningún cambio de las disposiciones vigentes con respecto a las prestaciones de jubilación de los magistrados de los dos Tribunales.

63. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha pedido que se señalen una vez más a la atención de la Asamblea General las preocupaciones relativas al Reglamento del plan de pensiones, expresadas por los magistrados de ese Tribunal con motivo del examen amplio más reciente. Por consiguiente, a continuación se exponen algunos de los principales argumentos que figuran en el informe del Secretario General (A/C.5/56/14):

“65. ...

Al parecer y en contravención de lo dispuesto en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, existe una enorme disparidad entre las condiciones de servicio de sus magistrados y las de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia respecto de las pensiones. ... Los magistrados son elegidos para prestar servicio en el Tribunal con arreglo a la resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo de 1993. El párrafo 3 del artículo 13 bis del Estatuto de ese Tribunal, aprobado de conformidad con dicha resolución y enmendado por la resolución 1329 (2000) de 30 de noviembre de 2000, dispone que ‘Los magistrados permanentes elegidos de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo serán elegidos por un período de cuatro años. Las condiciones de servicio serán las de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Los magistrados podrán ser reelegidos’.

Al parecer, el problema se ha planteado porque el régimen establecido para tener en cuenta la comparación entre la pensión de los magistrados del Tribunal y la de los de la Corte Internacional de Justicia da una ponderación excesiva a la duración de su respectivo mandato y no a los años efectivos de servicio. Sin embargo, los derechos de pensión deberían ser función de los años efectivos de servicio de un magistrado, sin que importe si parte de ese servicio se presta en un segundo, tercero o cuarto mandato.

A juicio de los magistrados, no se necesita una fórmula matemática para restablecer la paridad y determinar la pensión de un magistrado del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Lo que se necesita es reconocer, en primer lugar, que la pensión es función no de la duración del mandato sino del período efectivo de servicio del magistrado, con prescindencia de que los servicios se presten en un primer, segundo, tercero o cuarto mandato y, en segundo lugar, que hay una continuidad en los servicios prestados en más de un mandato.

66. En consecuencia, el Presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia propondría el texto siguiente para su examen:

a) La pensión de un magistrado del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia será la que corresponda a un magistrado de la Corte Internacional de Justicia que tenga el mismo número de años de servicio;

b) La pensión del magistrado que haya sido reelegido será equivalente a la que percibiría un magistrado de la Corte Internacional de Justicia por el mismo número de años de servicio.

67. ...

Lo que se ha hecho con esta formulación es agregar una declaración de principio a la propuesta presentada por el ex Secretario de este Tribunal ... Las disposiciones del artículo 1 2) del anexo II del informe del Secretario General (A/52/520) que se refieren a las pensiones de la Corte Internacional de Justicia después de nueve años de servicio podrían también ser aplicables a los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, pero únicamente después de nueve años de servicio. Ello contribuiría a que hubiera paridad e igualdad de fondo en el tratamiento de los dos grupos de magistrados.”

64. Por lo que se refiere a las cuestiones planteadas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en relación con las prestaciones de jubilación de los magistrados de ese Tribunal, el Secretario General observó una vez más que la Asamblea General había aprobado un plan de pensiones para los magistrados de los Tribunales sobre la base de las recomendaciones contenidas en el párrafo 29 del informe de la Comisión Consultiva (A/53/7/Add.6), en que la Comisión Consultiva recomendó que las prestaciones de jubilación de los magistrados de los Tribunales se basaran en las que se aplicaban a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, prorrateadas para tener en cuenta la diferencia en la duración del nombramiento, que es de nueve años para los miembros de la Corte y de cuatro años para los magistrados de los Tribunales. En opinión del Secretario General, como la Asamblea General era la única autoridad facultada para determinar las condiciones de servicio y las prestaciones de jubilación de los magistrados de los Tribunales, la cuestión de la diferencia existente entre las prestaciones de jubilación de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y los magistrados de la Corte Internacional de Justicia debía someterse una vez más al examen de la Asamblea General, a la luz de los argumentos aducidos por el ex Secretario del Tribunal y por su Secretario y su Presidente actuales.

65. Como se ha indicado anteriormente, en su informe (A/C.5/57/36), el Secretario General señaló a la atención de la Asamblea General el hecho de que en los reglamentos de los planes de pensiones aplicables a los miembros de la Corte Internacional de Justicia y a los magistrados de los Tribunales no había ninguna disposición que impidiera el pago de una pensión de jubilación a los magistrados que anteriormente hubieran prestado servicios en cualquiera de esos órganos, mientras prestaban servicios como magistrados en otro de esos órganos. Sobre la base de la recomendación de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la Asamblea General, en su resolución 58/264, decidió enmendar el artículo 1 del reglamento del plan de pensiones de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Por consiguiente, el párrafo 5 del artículo 1 del reglamento del plan de pensiones de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia establece que no se pagará ninguna pensión de jubilación a un ex magistrado que haya sido elegido miembro de la Corte Internacional de Justicia o que haya sido elegido o nombrado magistrado permanente del Tribunal Penal Internacional para Rwanda o que haya sido designado para cumplir funciones en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda como magistrado ad litem hasta que deje de tener ese cargo o nombramiento. El párrafo 5 del artículo 1 del reglamento del plan de pensiones de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda dispone que no se pagará ninguna pensión de jubilación a un ex magistrado que haya sido elegido miembro de la Corte Internacional de Justicia o que haya sido elegido o nombrado magistrado permanente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o que haya sido designado para cumplir funciones en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda como magistrado ad litem hasta que deje de tener ese cargo o nombramiento.

B. Magistrados ad litem

1. Introducción

66. En su informe a la Asamblea General sobre la financiación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (A/55/517), el Secretario General dijo que, desde su establecimiento, el Tribunal había experimentado una expansión rápida y continua. En consecuencia, en el contexto de las medidas a mediano y más largo plazo encaminadas a mejorar el funcionamiento del Tribunal, se propuso ampliar la capacidad de celebrar procesos de éste empleando magistrados ad litem. Las propuestas se basaron en el estudio del funcionamiento del Tribunal que se presentó como parte del informe sobre la marcha del Tribunal (véase A/55/382-S/2000/865).

Antecedentes

67. El Consejo de Seguridad, actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en su resolución 1329 (2000), de 30 de noviembre de 2000, decidió establecer un cuerpo de magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y aumentar el número de magistrados de las Salas de Apelaciones tanto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia como del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. El Consejo decidió también enmendar los artículos 12, 13 y 14 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y los artículos 11, 12 y 13 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. En el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda no se introdujeron enmiendas para autorizar la utilización de magistrados ad litem.

68. De conformidad con el nuevo artículo 12 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, titulado “Composición de las Salas”, las Salas estarán integradas por 16 (antes 14) magistrados permanentes independientes y, como máximo en cualquier momento, por nueve magistrados independientes ad litem (antes ninguno). El artículo estipula también que siete de los magistrados permanentes prestarán servicios en la Sala de Apelaciones. El artículo 14 revisado, titulado “Presidentes y miembros de las Salas”, dispone que dos de los jueces elegidos o designados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda serán asignados a fin de que presten servicios como miembros de la Sala de Apelaciones. De conformidad con el artículo 13 ter, una vez que el Secretario General invite a la presentación de candidaturas y el Consejo de Seguridad confeccione una lista de no menos de 54 candidatos, la Asamblea General elegirá 27 magistrados ad litem del Tribunal por un período de cuatro años. Los magistrados ad litem podrán ser designados por el Secretario General, a petición del Presidente del Tribunal, para prestar servicios en las Salas de Primera Instancia en uno o más juicios, por un período acumulativo de hasta tres años, que no podrá incluir, sin embargo, ningún período de tres años consecutivos.

69. En el párrafo 8 de su resolución 55/225 A, la Asamblea General, tomando nota de la resolución 1329 (2000) del Consejo de Seguridad relativa al establecimiento de un grupo de magistrados ad litem en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, decidió reanudar en la continuación de su quincuagésimo quinto período de sesiones el examen de los recursos necesarios para aplicar las enmiendas al Estatuto del Tribunal, sin perjuicio de la presentación de candidaturas y la elección de los magistrados ad litem.

2. Condiciones de servicio

70. Como seguimiento de la resolución 55/225 A de la Asamblea General y en relación con la solicitud hecha por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto con respecto a las condiciones de servicio de los magistrados ad litem, el Secretario General presentó su informe sobre las condiciones de servicio de los magistrados ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (A/55/756).

71. De conformidad con el apartado e) del párrafo 1 y con el párrafo 2 del artículo 13 ter del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, los magistrados ad litem será elegidos por un período de cuatro años y no podrán ser reelegidos. Durante el período de su mandato, los magistrados ad litem podrán ser designados por el Secretario General, a petición del Presidente del Tribunal, para prestar servicios en las Salas de Primera Instancia en uno o más juicios, por un período acumulativo de hasta tres años, que no podrá incluir ningún período de tres años consecutivos.

72. El apartado a) del párrafo 1 del artículo 13 quater del Estatuto del Tribunal estipula que, durante el período en el cual hayan sido nombrados para prestar servicios en el Tribunal, los magistrados ad litem gozarán de las mismas condiciones de servicio, mutatis mutandis, que los magistrados permanentes del Tribunal. Sin embargo, los magistrados ad litem sólo tendrán derecho a recibir prestaciones cuando hayan sido designados para prestar servicios en uno o más juicios y, en ese caso, sólo tendrán ese derecho por el período por el que hayan sido designados.

73. La Asamblea General, en la sección VIII de su resolución 53/214, aprobó revisiones de los emolumentos de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y de los magistrados de los Tribunales, que entraron en vigor el 1º de enero de 1999. El Secretario General, por lo tanto, propuso que a los magistrados ad litem se les aplicaran las condiciones de servicio aprobadas por la Asamblea respecto de los magistrados de los Tribunales y el reglamento de gastos de viaje y dietas de los magistrados de los Tribunales, que figura en el anexo III de su informe (A/52/520).

74. Por consiguiente, el Secretario General propuso que se aplicaran a los magistrados ad litem las siguientes condiciones de servicio:

a) *Emolumentos.* Respecto a los emolumentos:

i) El sueldo anual de los magistrados ad litem será de 160.000 dólares, prorrateados de acuerdo con el período de servicio;

ii) Los límites máximos y mínimos aplicables a los miembros de la Corte Internacional de Justicia y a los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se aplicarán también a la remuneración de los magistrados ad litem que presten servicio en La Haya;

b) *Gastos de viajes y dietas.* Los magistrados ad litem tendrán derecho al pago de los gastos de viaje y las dietas conforme al reglamento de gastos de viaje y dietas de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y de los magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda que figura en el anexo III del documento A/52/520;

c) *Subsidio de educación.* Los magistrados ad litem tendrán derecho al subsidio de educación de conformidad con las disposiciones contenidas en la sección II de la resolución 53/209 de la Asamblea General;

d) *Prestación para los familiares supervivientes en forma de una suma global.* En caso de fallecimiento de un magistrado ad litem, los familiares supervivientes recibirán, en la forma de una suma global, una indemnización equivalente a un mes de sueldo básico por año de servicio, con un mínimo de un mes y un máximo de tres meses;

e) *Condiciones generales de servicio.* Las siguientes condiciones generales se aplicarán a los magistrados ad litem: los magistrados ad litem no podrán ejercer función política o administrativa ninguna, ni dedicarse a otra ocupación de carácter profesional durante su período de servicio. Las prestaciones y subsidios enumerados anteriormente dependerán de la residencia del magistrado ad litem en La Haya;

f) *Seguro médico.* Los magistrados ad litem, por el tiempo que dure su nombramiento, podrán participar en el plan de seguro médico que corresponda a su lugar de destino en las mismas condiciones aplicables a los magistrados de los Tribunales.

75. El Secretario General recomendó asimismo que los magistrados ad litem no tuvieran derecho a recibir una pensión de jubilación. Propuso además que el magistrado que se hubiera jubilado de los Tribunales o de la Corte Internacional de Justicia y recibiera una pensión de jubilación de ellos no continuara recibiendo esa pensión de jubilación durante el tiempo en que prestara servicio en calidad de magistrado ad litem. Los períodos de servicio de un magistrado ad litem no se contarían para determinar los años de servicio acreditables que el magistrado pudiera haber acumulado en los Tribunales o la Corte Internacional de Justicia a los efectos de la pensión de jubilación, ni tampoco se añadirían a ellos.

76. En cuanto a las prestaciones por invalidez de los magistrados ad litem, la Organización reconoció la necesidad de prever un pago por invalidez en relación con un período de servicio. Por lo tanto, se propuso que, en caso de que no pudiera desempeñar sus funciones por razones de enfermedad o invalidez, el magistrado ad litem tuviera derecho a recibir el pago de su sueldo por el período de servicio sin que existiera responsabilidad alguna después de ese período.

77. En virtud de la limitación de su plazo de nombramiento, y teniendo en cuenta las condiciones aplicables a los magistrados permanentes, los magistrados ad litem no podrían recibir el subsidio de reinstalación.

78. Se pidió a la Asamblea General que examinara la cuestión de la aprobación de las condiciones de servicio de los magistrados ad litem conforme a la propuesta hecha por el Secretario General en los párrafos 18 a 25 de su informe (A/55/756).

79. En el párrafo 7 de su informe (A/55/806), la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto destacó que los magistrados de la Corte Internacional de Justicia eran elegidos por un período de nueve años y podían ser reelegidos, y los magistrados de los Tribunales eran elegidos por un período de cuatro años y también podían ser reelegidos. En cambio, los servicios de los magistrados ad litem eran de carácter mucho más temporal y podían ser intermitentes. La Comisión Consultiva tuvo en cuenta esa diferencia fundamental al evaluar la necesidad de varias prestaciones y subsidios que se proponían en el informe del Secretario General.

80. En consecuencia, la Comisión Consultiva mostró su conformidad con las propuestas del Secretario General relativas al sueldo anual de 160.000 dólares prorrateado de acuerdo con el período de servicio y a la aplicación de los límites máximos y mínimos, con la propuesta de aplicar el reglamento de gastos de viaje y dietas de los magistrados de los Tribunales a los magistrados *ad litem* y con la propuesta de proporcionar prestaciones de invalidez únicamente en los casos de lesiones o enfermedades atribuibles a la prestación de servicios en los Tribunales.

81. La Asamblea General, en su resolución 55/249, de 12 de abril de 2001, hizo suyas las observaciones y recomendaciones de la Comisión Consultiva contenidas en su informe (A/55/806, párrs. 7 a 15) sobre los emolumentos, los gastos de viaje y dietas y los pagos por invalidez de los magistrados *ad litem* del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

82. En su resolución 1431 (2002), de 14 de agosto de 2002, el Consejo de Seguridad decidió establecer un cuerpo de magistrados *ad litem* del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. En su informe (A/57/587), el Secretario General propuso establecer las condiciones de servicio aplicables a los magistrados *ad litem* del Tribunal Penal Internacional para Rwanda sobre la base de las disposiciones de la resolución 56/285 de la Asamblea General, relativa a las condiciones de servicio y remuneración de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y de los magistrados de los Tribunales, así como de los magistrados *ad litem* del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

83. La Asamblea General, en su resolución 57/289, hizo suyas las observaciones y recomendaciones formuladas por la Comisión Consultiva en su informe (A/57/593, párr. 23) sobre las condiciones de servicio de los magistrados *ad litem* del Tribunal Penal Internacional para Rwanda.

IV. Examen y recomendaciones

A. Remuneración

84. En el examen de la remuneración anual, cabe recordar que los emolumentos de los miembros de la Corte y de los magistrados de los Tribunales se han mantenido al nivel de 160.000 dólares desde enero de 1999. En el examen trienal de las condiciones de servicio de 2001 no se propuso la revisión de los sueldos.

85. Según datos de la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos, el índice neerlandés de precios al consumo durante el período comprendido entre enero de 1999 y mayo de 2004 aumentó un 17,4%. Como se indica en los párrafos 10 a 18 *supra*, durante el período comprendido entre enero de 2002 y julio de 2004 el dólar de los EE.UU. se devaluó en un promedio del 26,8% frente al euro. Como se indicó anteriormente, en 2004 la tasa mínima se mantuvo al nivel de 2003. De no haberse adoptado esta medida, el límite mínimo habría quedado fijado en 11.420 euros (basándose en el tipo medio de cambio de 2003, de 0,85656), cifra inferior al mínimo de 1999. Como resultado de la aplicación del mecanismo de límites máximos y mínimos, a los miembros de la Corte y a los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia se les aplicó el tipo de cambio mínimo durante los últimos 24 meses para determinar sus emolumentos, mientras que en los tres años comprendidos entre el 1° de enero de 1999 y diciembre de 2001, el tipo mínimo sólo se aplicó en una mensualidad.

86. A efectos informativos, también se recuerda que en su resolución 57/285 la Asamblea General decidió aprobar, con efecto a partir del 1º de enero de 2003, un aumento en la escala de sueldos para ciertos funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores. De resultados de ello, el sueldo básico del personal de categoría D-2 y de los Subsecretarios Generales y Secretarios Generales Adjuntos aumentó un 6,3%. Además, se recuerda que, en su resolución 58/266 de 23 de diciembre de 2003, la Asamblea General aprobó un aumento del 6,3% en la remuneración neta anual de los dos miembros de la Comisión de Administración Pública Internacional con dedicación exclusiva y del Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, con efecto a partir del 1º de septiembre de 2003.

87. En lo relativo al nivel de los sueldos, la Corte ha señalado que, aunque sus miembros deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, según lo previsto en el artículo 2 del Estatuto de la Corte, su remuneración es inferior a la que perciben los integrantes de los principales órganos judiciales de ámbito nacional. Además, la secretaria de la Corte ha recordado que en otros órganos judiciales internacionales equivalentes que también tienen su sede en La Haya, en particular el Tribunal Penal Internacional, los sueldos de los magistrados son de 180.000 euros al año.

88. En términos reales, los emolumentos de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, globalmente considerados, no han aumentado al mismo ritmo que el costo de la vida en los Países Bajos. Aunque la aplicación del mecanismo de límites mínimos y máximos a las tasas de 2003 garantizó una protección significativa frente al debilitamiento del dólar de los EE.UU. en relación con el euro, dicha protección no fue total, y en la práctica los sueldos de los magistrados disminuyeron un 4,35%. Además, según se ha indicado anteriormente, el sueldo básico del personal de la categoría de Secretario General Adjunto aumentó un 6,3%. En consecuencia, los Estados Miembros podrían considerar la posibilidad de aumentar los emolumentos anuales de los miembros de la Corte, los magistrados del Tribunal para la ex Yugoslavia y para Rwanda y los magistrados ad litem, de 160.000 dólares a 177.000 dólares de los EE.UU.: ello supondría un incremento del 10,6%.

89. El Secretario General observa también que el mecanismo utilizado para regular los emolumentos frente a las variaciones de la cotización del dólar en relación con el euro permitió proteger adecuadamente, gracias a una cierta flexibilidad en su utilización, el valor de los sueldos de los magistrados durante el último período de tres años. En consecuencia, se propone que este mismo mecanismo de límites máximos y mínimos se siga aplicando a los emolumentos de los magistrados. A este respecto, debe observarse no obstante que los emolumentos sólo aumentarán en términos reales si las tasas máxima y mínima se mantienen a los tipos actuales. Durante los siete primeros meses de 2004, el tipo de cambio medio ha sido del 0,816. De mantenerse esta tasa, los límites mínimo y máximo para 2005 quedarían fijados en 0,783 y 0,8484, respectivamente. Sobre la base de estos límites, aunque los emolumentos se aumentasen hasta los 167.000 dólares el emolumento mínimo mensual que recibiría un magistrado sería de 11.550 euros y el máximo alcanzaría los 12.503 euros, con el consiguiente descenso de los emolumentos mensuales.

B. Otras condiciones de servicio

Gastos relacionados con la educación

90. Sobre la base del examen del monto del subsidio de educación llevado a cabo en 2002 por la Comisión de Administración Pública Internacional, la Asamblea General, en la sección I.E de su resolución 57/285, aprobó los aumentos que se indican a continuación de la cuantía máxima para calcular los reembolsos en seis países/zonas monetarias, así como otros ajustes en el cálculo de los reembolsos de los gastos relacionados con la educación, para que entraran en vigor en el año escolar en curso el 1° de enero de 2003, tal como había recomendado la Comisión en los párrafos 141 a 143 de su informe a la Asamblea en su quincuagésimo séptimo período de sesiones (A/57/30).

Cuadro 2

Subsidio de educación

<i>País/moneda</i>	<i>Cuantía máxima de los gastos a los efectos del cálculo de los reembolsos (en moneda local)^a</i>	<i>Cuantía máxima del subsidio de educación (en moneda local)</i>
Austria (euro)	13 618	10 214
Suiza (franco suizo)	25 347	19 010
España (euro)	10 586	7 940
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (libra esterlina)	15 900	11 925
Italia (euro)	13 518	10 138
Dólar de los Estados Unidos (en los Estados Unidos de América)	25 743	19 307
Dólar de los Estados Unidos (fuera de los Estados Unidos de América)	14 820	11 115

^a La cuantía del subsidio especial de educación por hijo discapacitado será igual al 100% de la cuantía máxima revisada para calcular los reembolsos en relación con el subsidio de educación ordinario. En los lugares en que los gastos relacionados con la educación se reembolsan en otras monedas, las cuantías no sufrirán modificación.

91. El Secretario General desearía proponer que, como seguimiento de la resolución 45/250 C de la Asamblea General, el aumento de la cuantía del subsidio de educación (inclusive el correspondiente a los hijos discapacitados), en vigor desde el 1° de enero de 2003, aplicable al personal del cuadro orgánico y categorías superiores, aprobado por la Asamblea General en la sección I.E de su resolución 57/285, se aplique, en las mismas condiciones, a los miembros de la Corte Internacional de Justicia y a los magistrados de los Tribunales a partir del año escolar en curso con efecto al 1° de enero de 2003.

92. La Comisión de Administración Pública Internacional llevará a cabo su próximo examen del subsidio de educación en 2004. El Secretario General desea proponer que cualquier decisión adoptada por la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesiones para actualizar el subsidio de educación o introducir cambios en las disposiciones relativas a los niños con discapacidad se extiendan a

los miembros de la Corte. Las consecuencias del cambio propuesto para el presupuesto por programas se examinan en el párrafo 107 *infra*.

93. De conformidad con lo indicado en el párrafo 7 del séptimo informe de la Comisión Consultiva a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo período de sesiones (A/48/7/Add.6), el próximo examen de los gastos relacionados con la educación de los hijos de los miembros de la Corte Internacional de Justicia se llevará a cabo en ocasión del próximo examen amplio de las condiciones de servicio.

Prestaciones de jubilación

94. Según la decisión de la Asamblea General contenida en la sección VIII de su resolución 53/214 de fijar la pensión de jubilación de los miembros de la Corte en la mitad del sueldo anual, las prestaciones anuales de jubilación de los miembros de la Corte que se retirasen en 2005 aumentarían de 80.000 a 88.500 dólares al año con efecto a partir del 1° de enero de 2005. Las prestaciones anuales de jubilación de los magistrados de los Tribunales que se retirasen en 2005 aumentarían de 35.500 dólares a 39.272 dólares al año, con efecto a partir del 1° de enero de 2005.

95. De conformidad con la propuesta de aumento del sueldo básico de los miembros de la Corte, se recomienda que los pagos en concepto de pensiones aumenten un 10,6%, con efecto a partir del 1° de enero de 2005. Según se señala en el párrafo 44 *supra*, la Corte Internacional de Justicia, preocupada por los efectos de la devaluación del dólar de los EE.UU. frente al euro en los pagos en concepto de pensiones a los antiguos miembros de la Corte, agradecería que se adoptaran medidas para remediar esa disparidad aumentando en la medida de lo posible las cantidades que se les abonan. En opinión del Secretario General, debería contemplarse la posibilidad de aplicar el mecanismo de límites máximos y mínimos a los pagos en concepto de pensiones a los antiguos magistrados y sus supérstites residentes en los países de la zona euro para evitar que sus pensiones sigan erosionándose.

Magistrados ad hoc

96. El Secretario General propone que en el presente examen periódico no se introduzca cambio alguno en las disposiciones relativas a los magistrados ad hoc.

Magistrados ad litem

97. El Secretario General propone que cualquier subida de los emolumentos anuales de los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales que pueda efectuarse se haga extensiva a los magistrados ad litem de los Tribunales con efecto a partir del 1° de enero de 2005.

V. Consecuencias financieras

98. Si la Asamblea General aprobase las propuestas que figuran en los párrafos 88, 91, 92, 94 y 95 *supra* relativas al aumento del sueldo anual, a los pagos adicionales en concepto de pensiones para los antiguos magistrados y sus viudas y a los subsidios de educación de los hijos de los miembros de la Corte y de los magistrados de los Tribunales, las consecuencias estimadas para el presupuesto por programas se cifrarían en 2.320.600 dólares de los EE.UU. para el bienio 2004-2005, como puede verse en el cuadro 3. Se considera que la estimación de 2.320.600 dólares en

concepto de necesidades totales para el bienio 2004-2005, derivada de esas tres partidas de gastos, está relacionada con los ajustes por la inflación. En consecuencia y de conformidad con los procedimientos indicados en el párrafo 34 de la resolución 52/220 de la Asamblea General, se informaría de estas necesidades en el marco del informe de ejecución financiera.

Cuadro 3

Consecuencias para el presupuesto por programas de las propuestas contenidas en los párrafos 88, 91, 92, 94 y 95 del informe sobre las condiciones de servicio y remuneración de los funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría, bienio 2004-2005

<i>Necesidades adicionales que resultarían de la aprobación de las recomendaciones</i>	
Miembros de la Corte Internacional de Justicia	
Sueldo (aumento)	255 000
Pensiones	1 156 000
Subsidio de educación	100 500
Total	1 511 500
Magistrados del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia	
Sueldo (aumento)	391 000
Pensiones	46 100
Subsidio de educación ^a	—
Total	437 100
Magistrados del Tribunal Penal Internacional para Rwanda	
Sueldo (aumento)	340 000
Pensiones	32 000
Subsidio de educación ^a	—
Total	372 000

^a Sobre la base de la composición actual del Tribunal, las recomendaciones contenidas en el informe no tienen consecuencias para el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2004-2005.

VI. Próximo examen amplio

99. En su resolución 56/285, la Asamblea General decidió que el próximo examen de las condiciones de servicio y la remuneración de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, los magistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y de los magistrados ad litem del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia se efectuaría en su quincuagésimo noveno período de sesiones. En caso de que la Asamblea General decidiera mantener el ciclo trienal de exámenes, el próximo examen amplio de la Asamblea tendría lugar en su sexagésimo segundo período de sesiones, en el año 2007.

Anexo I

Variaciones de la remuneración neta de los miembros de la Corte, funcionarios de la Secretaría y miembros de órganos de las Naciones Unidas, de enero de 2000 a enero de 2004

(En dólares EE.UU., tasa correspondiente a funcionarios con familiares a cargo)

	2000	2001	2002	2003	2004
Corte Internacional de Justicia					
Presidente ^a	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Índice	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Miembros de la Corte	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Índice	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Funcionarios superiores de la Secretaría					
La Haya					
Secretario General Adjunto ^b	124 989	121 334	120 606	159 378	188 520
Índice	100,0	97,1	96,5	127,5	150,8
Subsecretario General ^c	113 970	110 617	109 950	145 511	172 239
Índice	100,0	97,1	96,5	127,7	151,1
Ginebra					
Secretario General Adjunto ^b	148 957	145 905	148 023	185 631	204 346
Índice	100,0	98,0	99,4	124,6	137,2
Subsecretario General ^c	135 953	133 153	135 096	169 589	186,755
Índice	100,0	98,0	99,4	124,7	137,4
Nueva York					
Secretario General Adjunto ^b	159 004	164 631	170 548	187 766	197 312
Índice	100,0	103,5	107,3	118,1	124,1
Subsecretario General ^c	145 169	150 329	155 755	171 548	180 304
Índice	100,0	103,6	107,3	118,2	124,2
Miembros de dedicación exclusiva de órganos subsidiarios					
Presidentes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto/Comisión de Administración Pública Internacional ^d					
Índice	143 692	159 691	162 685	167 266	182 189
	100,0	111,1	113,2	116,4	126,8
Vicepresidente de la Comisión de Administración Pública Internacional					
Índice	135 692	149 691	152 685	157 266	172 189
	100,0	110,3	112,5	115,9	126,9
Miembros de la Dependencia Común de Inspección, Ginebra					
Índice	117 771	115 291	117 611	148 171	163 378
	92,2	90,3	99,9	125,8	138,7

^a Incluye un estipendio especial de 15.000 dólares.^b Incluye un subsidio por gastos de representación de 3.000 dólares anuales.^c Incluye un subsidio por gastos de representación de 4.000 dólares anuales.^d Incluye un estipendio especial de 10.000 dólares anuales.

Anexo II

Variaciones de los emolumentos brutos de funcionarios del poder judicial de distintos países, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Reclamaciones de los Estados Unidos de América y la República Islámica del Irán y el Tribunal Penal Internacional, 2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Corte Suprema de los Estados Unidos					
Presidente de la Corte (dólares EE.UU.)	181 400	186 300	192 600	198 600	201 600
Índice	100,0	102,7	106,2	109,5	111,4
Magistrado Adjunto (dólares EE.UU.)	173 600	178 300	184 400	190 100	193 000
Índice	100,0	102,7	106,2	109,5	111,8
Corte Suprema del Canadá					
Presidente de la Corte Suprema (dólares canadienses) ^{a b}	254 500 ^c	254 500	270 100	270 100	278 400
(dólares EE.UU.)	174 315	168 543	169 874	172 038	212 519
Índice	100,0	96,7	97,5	98,7	121,9
Magistrado Adjunto (dólares canadienses) ^{b d}	235 700	235 700	250 200	250 200	257 800
(dólares EE.UU.)	161 438	156 093	157 358	159 363	196 794
Índice	100,0	96,7	97,5	98,7	121,9
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte					
Lord Presidente del Tribunal Supremo (libras esterlinas)	165 260	171 375	177 545	200 236	205 242
(dólares EE.UU.)	253 548	252 022	253 636	320 891	364 551
Índice	100,0	94,6	95,2	120,4	136,8
Presidente del Tribunal de Apelaciones (libras esterlinas)	157 390	163 213	169 089	181 176	185 705
(dólares EE.UU.)	253 855	240 019	241 556	297 010	329 849
Índice	100,0	94,6	95,2	117,0	129,9
Australia					
Presidente de la Corte Suprema (dólares australianos) ^e	276 800	287 900	308 100	336 450	336 450
(dólares EE.UU.)	180 915	159 944	157 194	189 017	251 082
Índice	100,0	88,4	86,9	104,5	138,8
Magistrados de la Corte (dólares australianos) ^e	251 200	261 300	279 600	305 330	305 330
(dólares EE.UU.)	164 183	145 167	142 653	171 534	227 858
Índice	100,0	88,4	77,5	104,5	138,8
Japón					
Presidente de la Corte Suprema (yen)	44 187 032	44 187 032	44 003 403	42 887 845	41 645 344
(dólares EE.UU.)	433 206	384 235	335 904	360 402	389 209
Índice	100,0	88,7	77,5	83,2	89,8
Magistrado Adjunto (yen)	32 258 067	32 258 067	32 124 012	31 305 273	30 406 524
(dólares EE.UU.)	316 256	280 505	245 221	263 070	276 423
Índice	100,0	88,7	77,5	83,2	89,9

	2000	2001	2002	2003	2004
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas					
Presidente					
(euros)	235 904	241 329	250 258	255 264	266 530
(dólares EE.UU.)	237 089	224 555	220 298	266 455	332 747
Índice	100,0	94,7	92,9	112,4	140,3
Magistrado del Tribunal					
(euros)	192 313	196 352	204 015	208 095	217 280
(dólares EE.UU.)	193 279	183 061	179 591	217 218	271 261
Índice	100,0	94,7	92,9	112,4	140,3
Tribunal Europeo de Derechos Humanos					
Presidente					
(euros)	167 699 ^f	172 730 ^f	172 730 ^f	177 912 ^f	190 004 ^f
(dólares EE.UU.)	168 542	160 724	152 051	185 712	237 208
Índice	100,0	95,4	90,2	110,2	140,7
Magistrado del Tribunal					
(euros)	167 699 ^f	172 730 ^f	172 730 ^f	177 912 ^f	177 912 ^f
(dólares EE.UU.)	168 542	160 724	152 051	185 712	237 208
Índice	100,0	95,4	90,2	110,2	140,7
Tribunal de Reclamaciones de los Estados Unidos y la República Islámica del Irán					
Presidente					
(dólares EE.UU.)	245 000				
Índice	100,0				
Magistrado de los Estados Unidos– República Islámica del Irán	210 000				
Índice	100,0				
Magistrado de un tercer país	235 000				
Índice	100,0				
Tribunal Penal Internacional					
Magistrado del Tribunal					
(euros)				180 000	180 000
(dólares EE.UU.)				187 891	224 719
Índice				100,0	119,6

^a También tiene derecho a un subsidio por gastos de representación de 10.000 dólares canadienses.

^b También tiene derecho a una prestación incidental de 2.500 dólares canadienses.

^c Sueldo efectivo a partir del 1° de abril de 2000.

^d También tiene derecho a un subsidio por gastos de representación de 5.000 dólares canadienses.

^e También tiene derecho a un estipendio anual de 20.000 dólares australianos.

^f También tiene derecho a un estipendio anual de 11.740 euros.